

Simbiosis:

pandillas y poder municipal en Apopa, El Salvador

Por Felipe Puerta, Héctor Silva y Steven Dudley*



La historia del exalcalde de Apopa José Elías Hernández o “El Maestro”, como lo conocían las pandillas, es una que es cada vez más común en este país centroamericano marcado por alianzas oscuras entre pandillas y políticos.

El 2 de noviembre de 2013, Día de Muertos, el alcalde de Apopa, José Elías Hernández, citó a Carlos Axume Arroyo a su despacho a una reunión atípica para un político electo en uno de los municipios más importantes de El Salvador.

Axume Arroyo, alias “Humilde”, era líder de una clica local de la MS13 en Apopa, y era, también, empleado de la alcaldía que dirigía Hernández desde marzo de 2012, cuando fue elegido.

Ese mismo año, la MS13 y la pandilla contraria, el Barrio 18, habían hecho un pacto entre ellas y el gobierno central con el que se comprometían a no cometer crímenes como “robos, extorsiones, saqueos y hurtos”, como un vocero de Barrio 18 dijo en un acto celebrado por la municipalidad apopense en marzo de 2013 para conmemorar el primer aniversario de la llamada “tregua”. El pacto funcionaba en Apopa antes incluso de que adquiriera relevancia en todo el país.

En esencia, la tregua consistió en que los líderes encarcelados de la MS13 y Barrio 18 ordenaron a sus subalternos en la calle disminuir los homicidios, a cambio de algunos beneficios económicos y de la libertad para comunicarse entre ellos, como se descubriría más adelante.

El problema era que no todos habían acatado la promesa de sus líderes encarcelados, pero el asunto en Apopa iba más allá de las pandillas. Era el momento, había decidido Hernández, de arreglar el asunto: el funcionario citó a Humilde a su despacho aquel día de muertos de 2013.

Para Hernández era esencial bajar los niveles de crimen en la municipalidad. Él y otros alcaldes de El Salvador hacían parte de un programa del gobierno central del entonces presidente Mauricio Funes (2009-2014) que podía abrir la posibilidad a recibir transferencias para implementar programas sociales y económicos en sus municipios.

Los recursos, calculaba el alcalde, no llegarían si no cumplía con su parte del trato: lograr que los homicidios bajaran en Apopa. Para ello, Hernández no podía permitirse la falta de humildad del Humilde, quien según documentos judiciales a los que tuvo acceso InSight Crime era uno de esos líderes locales que se negó a seguir la orden de bajar los homicidios que el liderazgo de la MS13 había hecho llegar desde la cárcel.

En el despacho municipal, Hernández y Humilde discutieron “asuntos de violencia en el municipio”, según señaló un testigo en el proceso judicial que la Fiscalía General de la República (FGR) armaría contra el alcalde tres años después. La reunión duró un poco más de una hora. Humilde salió y estaba aún muy cerca de la alcaldía, ubicada justo frente a la plaza del municipio, cuando fue alcanzado por varios disparos. Según investigadores de FGR, los sicarios eran de Barrio 18. En 2017, la FGR haría una acusación sorprendente ante el tribunal especializado B de San Salvador: el alcalde estaba ligado al asesinato de Humilde.

El cargo de homicidio agravado contra Hernández es parte de una serie de acusaciones contra el ahora exalcalde en un proceso judicial que aún sigue abierto. La FGR también acusa al exalcalde de participar en otros cuatro asesinatos, de agrupaciones ilícitas por sus relaciones con las pandillas, de amenazas con agravación especial y de otra serie de delitos como expresiones de violencia contra la mujer y posesión ilegal de bienes culturales.

A través de uno de sus abogados y en diversas declaraciones públicas, Hernández ha [insistido](#) en que es inocente de todos los cargos que le imputa el Ministerio Público. El más reciente argumento de su defensa en el caso por homicidio es que “nadie ha visto disparar al señor Hernández”, aunque el fiscal del caso ya ha señalado que él no es acusado de disparar contra la víctima, sino de haber ordenado el asesinato. En el requerimiento fiscal (acusación) al que tuvo acceso InSight Crime el exalcalde también es señalado como coautor en este delito.

En junio de 2017, en un caso diferente, un tribunal de San Salvador condenó al alcalde a 6 meses de trabajo comunitario por infracción a las medidas de registro, control y circulación de bienes culturales, por 19 piezas arqueológicas que fueron encontradas al interior de su oficina, 16 de las cuales son patrimonio cultural. Hernández [alegó que](#) “solamente mis hermanos saben que esas piezas eran de mi padre”.

La FGR insiste en que el de Elías Hernández es uno de los casos que mejor muestra como el poder político, en este caso desde un gobierno local, y las dos pandillas más grandes y violentas del país crearon una relación de conveniencia mutua. A los pandilleros ese vínculo les trajo dinero, trabajo, gasolina gratis y hasta pollo frito. Pero sobre todo influencia en el gobierno municipal. A Hernández le reportó votos, recursos y poder.

La historia de Apopa, uno de los municipios suburbanos más importantes y poblados de la periferia de la capital San Salvador, es uno de los capítulos más importantes sobre la relación entre el sistema político salvadoreño y las pandillas, sobre lo que se negocia y se anuncia a la luz pública y lo que ocurre tras bambalinas. Es, además, una historia que se ha repetido en otros municipios del país.

El cruce de la legalidad con la ilegalidad

Apopa es un municipio dormitorio a 12 kilómetros al norte de San Salvador donde la MS13 y el Barrio 18 han ejercido un importante control territorial y social desde hace más de dos décadas.

La ubicación del municipio lo ha convertido en un punto de paso obligado para gran parte de los bienes que entran, salen y pasan por la capital del país, así como en un centro de producción y comercio importante. El municipio está dominado por la microindustria. Y, al decir de algunas fuentes en el municipio, el nivel de recaudo de impuestos de la alcaldía ha sido tan alto que un empleado de la municipalidad apopense dijo a InSight Crime que el gobierno local podría funcionar fácilmente sin transferencias del gobierno central.

Lo anterior ha hecho de gobernarlo un tema crucial para los partidos políticos que desde el final de la guerra civil en 1992 se han disputado el poder del país, y de controlarlo una fuente de ingresos segura para las pandillas que operan en la municipalidad. Ganar suficientes votos en Apopa en las elecciones municipales, como en otros de los municipios más poblados cercanos a la capital y con importante presencia de pandillas, también ha solido significar más votos en los comicios legislativos, que se celebran simultáneamente.

Aquí las pandillas han traducido su influencia en poder político, como lo demuestra la historia del exalcalde Hernández, quien con la bendición de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) – el tradicional partido de la derecha salvadoreña que gobernó el país entre 1989 y 2009 – consiguió acabar con la hegemonía que había ejercido el partido rival, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en el municipio.

Si bien Hernández no contaba con ningún tipo de experiencia en la política cuando decidió candidatearse para gobernar Apopa, su amplio círculo social, y más específicamente su capacidad de llegar a acuerdos con las pandillas para utilizar el control territorial ejercido por estas con el fin de garantizar resultados electorales, podía significar para ARENA retomar el control que por 15 años había ejercido el FMLN en el lugar.

“Era una persona gris, a la que no se conocía en política, pero supo utilizar bien sus alianzas.”

Este tipo de acuerdos no son nuevos. En San Salvador, un alto oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato y que ha trabajado en planes antipandillas desde finales de la década de 1990, aceptó que la MS13 y el Barrio 18 llevan años pactando con los principales partidos tratos electorales en municipios del área metropolitana de San Salvador.

Un exministro de gobierno, que también habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, confirmó este tipo de influencia.

Sin embargo, según la fuente policial, en los últimos años las relaciones de poder entre las pandillas y los partidos políticos ha evolucionado drásticamente, pasando de un “poder que viene de la cercanía donde las pandillas dan permiso a los políticos para entrar a las comunidades y hacer campaña” a que más recientemente las pandillas exigieran a estos mismos políticos dádivas, favores y alimento y posteriormente dinero para ampliar su base de poder. Y si la Fiscalía está en lo correcto, el caso de Hernández es un claro reflejo de este tipo de acuerdos.

A primera vista, Hernández parece tener un perfil extraño para postularse como alcalde. Según varios entrevistados por InSight Crime, incluidos excolaboradores del alcalde, Hernández recibió poca educación formal y siempre tuvo problemas con autoridad y la ley. En 1987, estuvo encarcelado por un caso de robo de mercadería. Luego, según muestran expedientes judiciales a los que tuvo acceso InSight Crime, fue vinculado a una banda de robo de furgones, pero la investigación no arrojó resultados y Hernández nunca fue procesado.

Según la fuente cercana a ARENA el historial criminal de Hernández también incluye microtráfico, contrabando y hasta relaciones con coyotes. En su pasado judicial también hay registros de denuncias y acusaciones de amenaza, lesiones y desobediencia en el año

2000 y luego en 2004 hay registros de un caso de secuestro. Sin embargo, ninguna de estas investigaciones le ocasionaron más cargos o mayor tiempo en prisión.

De hecho, el historial criminal de Hernández le pudo haber dado una ventaja. Le dio un entendimiento del funcionamiento de los muchos espacios donde la legalidad y la ilegalidad se cruzan en El Salvador la que terminaría por ganarle la influencia electoral.

“Era una persona gris, a la que no se conocía en política, pero supo utilizar bien sus alianzas”, dijo a InSight Crime sobre Hernández un excolaborador de ARENA en las elecciones municipales de 2012.

Parte de la astucia de Hernández radicó en comprender que si quería aumentar su base de poder, debía sofisticar sus operaciones y aumentar el perfil de sus relaciones personales. Con esto en mente, Hernández profundizó su relación con los textileros, al tiempo que mantenía un vínculo paralelo con el bajo mundo en el que había crecido..

Hernández se jactaba, por ejemplo, de tener buenas relaciones con los líderes textileros de entonces, entre los que se contaba Javier Simán, un empresario que actualmente es precandidato a la presidencia por ARENA. Según el excolaborador de ARENA, cuando Hernández se acercó al partido antes de las elecciones municipales de 2012, se presentó como un empresario textilero de Apopa, algo que fue confirmado por fuentes de la municipalidad y por registros de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), donde el exalcalde alguna vez figuró como miembro. Un abogado del equipo legal de Hernández, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, confirmó que antes de dedicarse a la política vendía telas al por mayor en Apopa y otros municipios de la capital.

El entonces candidato también tomó ventaja de esos contactos para ampliar su base electoral al hacer de los textileros del municipio parte central de su plataforma electoral.

Según él, esta cooperación la consiguió “primero porque yo soy empresario, soy reconocido a nivel local y de San Salvador, internacional también. Tengo el acercamiento con la empresa privada, con las embajadas de países amigos y por qué no aprovechar el capital humano, amigable dentro y fuera del territorio salvadoreño”.

Cómo ganar una alcaldía

Aunque Hernández estaba decidido a enfocar todos sus recursos, tantos legales como ilegales, en recuperar la alcaldía de Apopa para ARENA, en esas elecciones él no era un candidato al que el partido le hubiera puesto mucha atención al principio. Una fuente cercana a ARENA señaló que la primera vez que Hernández se presentó a la contienda en 2012, Apopa no era una prioridad para el partido; en lugar de eso, ARENA estaba concentrando sus recursos en ganar poder en la capital, San Salvador.

Para ARENA, Apopa parecía una causa perdida. El municipio había sido gobernado durante tres periodos consecutivos por Luz Estrella Rodríguez, un viejo alfil del FMLN que se había desempeñado como concejal de ese municipio desde 1997. Luego, Rodríguez

sería vicepresidenta de la compañía ALBA Petróleos, financiada en parte con dinero procedente de Venezuela, y es actualmente viceministra de Economía en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN.

Meses antes de las elecciones, la Comisión Política del FMLN [rechazó](#) la candidatura de Rodríguez para buscar su reelección como alcaldesa del municipio y en su lugar postuló a Zoila Quijada, quien entonces se desempeñaba como concejal del FMLN en la Asamblea Legislativa. Según directivos locales del FMLN, el cambio en la postulación se dio porque la alcaldía de ese municipio “resulta fácil de ganar”. Rodríguez lo atribuyó a “diferencias que tuvo con la Directiva Departamental de San Salvador”.

Si bien temas de interés electoral como impuestos, educación y salud fueron parte del debate, como suele suceder en las elecciones a lo largo de la región, las elecciones estuvieron más marcadas por acusaciones personales que por propuestas. Hernández señaló a Quijada de “[no servir en la iglesia](#)” y de “no evangelizar en las comunidades”. También la acusó ante la Junta Electoral Municipal (JEM) de “[difamación e injuria](#)”.

Finalmente, Hernández, consiguió 20.419 votos a su favor, mientras que Zoila Quijada recibió 17.498 votos. Hernández había ganado la alcaldía, para sorpresa incluso de ARENA. De su victoria el flamante alcalde dijo que era un triunfo de la comunidad empresarial. Pero según la acusación de la FGR, los vínculos de Hernández con las pandillas fueron decisivos.

La acusación de la Fiscalía no explica exactamente cuándo ni cómo comenzó la relación entre el alcalde y las pandillas, pero lo que la fiscalía sí asegura es que había iniciado mucho antes del ciclo electoral de 2012. La fiscalía ofrece varios ejemplos.

Uno de los cuatro testigos que el Ministerio Público presentó ante el juez (que podrían convertirse en seis según una fuente cercana al proceso penal) asegura que el alcalde desarrolló “una relación sentimental” con Ingrid Xiomara Berríos, una mujer vinculada a las pandillas que luego se desempeñaría como secretaria de colecturía en la alcaldía, según el testigo.

Según se desprende de los procesos judiciales y fuentes fiscales consultadas, esa comunicación entre la alcaldía y las pandillas, facilitada por Berríos, era fuerte y clara desde ambos lados. Las pandillas asegurarían a Hernández un espacio para hacer política, en parte con votos y en parte al impedir el ingreso de seguidores de otros candidatos a las zonas que controlaban; luego eso incluiría el compromiso de mantener los homicidios a un mínimo.

A cambio, Hernández prometió la creación de algunas plazas para designados por las pandillas, en especial por la facción Revolucionarios de la pandilla Barrio 18. Su amante proveería los nombres de los pandilleros que recibirían los puestos.

Los expedientes señalan también que durante su relación Hernández le compró a Berríos, con dineros públicos, dos viviendas ubicadas en la colonia Valle del Sol y un automóvil que equipó con un conductor, pues su ella no sabía manejar.

Además, la fiscalía dice que en 2012 la municipalidad acordó realizar un aumento de US\$ 0,25 a los impuestos diarios que se pagan en el mercado. Luego la alcaldía daría el excedente a las pandillas.

En Apopa, como en otros municipios aledaños a San Salvador, este tipo de alianzas electorales terminaron por ser determinantes. Incluso, según la acusación de la FGR por un caso que involucra a la MS13 conocido como Operación Jaque, los partidos políticos intentaron utilizar estos tratos para influenciar los resultados de la elección presidencial de 2014.

Una investigación de InSight Crime sobre las pandillas en El Salvador revela, por ejemplo, que en las elecciones municipales de 2012 y en las presidenciales de 2014 las pandillas establecieron perímetros alrededor de algunos centros de votación que se encontraban bajo su área de influencia.

En algunos barrios, a los cuales la policía usualmente no llega, eran las pandillas quienes decidían quien entraba y quien no en el día de las elecciones. En otros ubicados en áreas más populares, donde las pandillas no tenían un control absoluto, sus miembros utilizaban otros métodos de intimidación, desde amenazas directas a ciudadanos que han apoyado a candidatos específicos, hasta acercamientos más sutiles a otros familiares de pandilleros para tratar de convencerlos de por quién votar.

En algunos casos, la influencia era más sofisticada. Hubo reportes recogidos por InSight Crime en El Salvador de dos miembros de ARENA que cuidaron urnas en la presidencial de 2014 de pandilleros que controlaban pequeños locales en las cercanías de los centros de votación. Los pandilleros se hacían pasar por miembros de organizaciones no-gubernamentales e instalaban toldos con computadoras en los cuales pretendían ayudar a los ciudadanos a votar. Le pedían al votante su identificación y aprovechaban la oportunidad para intimidarlo.

Esto, según la acusación y varias fuentes consultadas, fue lo que ocurrió en Apopa en 2012.

“Nos intimidaban. No nos dejaban entrar”, dijo el excolaborador de ARENA que habló para esta investigación.

La sombra de la tregua pandillera en Apopa

La tregua entre las pandillas fue un pacto complicado que fue gestado y ejecutado en secreto por la administración Funes, aunque durante mucho tiempo el presidente y sus asesores negaron su participación en el trato. Testimonios posteriores, incorporados a varios procesos judiciales, sin embargo, han dejado claro que fue un plan parido desde el Estado.

Hasta ahora no se ha revelado cuáles fueron las condiciones exactas de la tregua, pero está claro que la relación entre las pandillas y los políticos cambió en ese periodo: los partidos buscaron a la MS13 y al Barrio 18 con renovado interés, pensando en votos y recursos. Y los pandilleros buscaron a los políticos pensando en dinero, poder y en afianzar su control territorial.

No todo fue negativo. En 2012, después de la tregua, los homicidios bajaron a la mitad en el país y Apopa [no era la excepción](#). Con 62 homicidios registrados, ese año el municipio experimentó una reducción de 55 por ciento con respecto al año anterior. La colonia Valle de Sol en Apopa, donde el alcalde había comprado las viviendas para su amante,

no registró ningún homicidio durante los primeros 16 meses de la tregua.

Durante ese periodo los textileros del municipio también vieron retribuciones políticas. Según el Plan de Competitividad Municipal 2012-2016, firmado por el propio Hernández poco después de ganar la alcaldía, la municipalidad de Apopa cuenta con un registro catastral de 4.803 empresas o negocios, 582 de los cuales son establecimientos o empresas del sector industrial, sobre todo enfocadas en productos textiles y metálicos.

La relación de Hernández con la élite textilera seguiría siendo buena durante todo su periodo, como lo muestra que el 4 de junio de 2016, cuando se celebró en Apopa los 50 años de Industrias Sintéticas de Centroamérica (INSINCA), una de las empresas más emblemáticas de El Salvador, él fue protagonista del evento junto a altos ejecutivos y expresidentes de la empresa.



*El alcalde Hernández (de cobarta) en la alcaldía municipal de Apopa.
Foto tomada del sitio web de la municipalidad*

Apopa, no obstante, también experimentó todos los claroscuros de aquella tregua, tanto la baja de homicidios que ocurrió en todo El Salvador, como la dinamización de la añeja relación entre políticos y pandilleros, sobre todo en municipios donde la MS13 y el Barrio 18 han tenido una impronta considerable. Fue en medio de ese contexto que, al decir de los investigadores judiciales, Hernández desarrolló relaciones más estrechas con las pandillas, principalmente con una facción: Revolucionarios del Barrio 18.

Eran los Revolucionarios, por ejemplo, quienes recibían los cobros del impuesto extra que el alcalde había fijado al mercado. las plazas de trabajo dentro de la alcaldía, la gasolina para sus carros y hasta pollo asado, todo patrocinado por la alcaldía. Las pandillas empezaron a llamarlo “Maistro,” un término de afecto y respeto para los más experimentados en El Salvador.

Los contactos entre el alcalde de Apopa y las pandillas no eran del todo secretos, ni del todo perversos. Algunos funcionarios incluso han sugerido que Hernández esperaba que el aumento en los ingresos de las pandillas por el dinero extra de los impuestos sirvieran como aliciente para que dejaran de extorsionar a los comerciantes locales.

Una fuente de inteligencia dijo a InSight Crime que el plan solo había funcionado parcialmente, y que algunas facciones de las pandillas siguieron extorsionando a los comerciantes. Y si bien desde el inicio de la tregua en la municipalidad se presentó una leve tendencia a la baja en los casos de extorsiones reportadas —uno de los crímenes con mayor nivel de subregistro en la región—, en 2015 estos ya se habían vuelto a duplicar con respecto al año anterior.

En los medios de prensa, Hernández aceptaba haber negociado directamente con los grupos del municipio la implementación de la tregua. El alcalde incluso realizó varios recorridos para borrar los grafitis del Barrio 18, en lo que parecía ser un acto concertado.

“Eso significa paz social para nosotros”, dijo uno de los pandilleros en uno de esos recorridos políticos. Apopa era el municipio estrella de la tregua entre pandillas, al menos oficialmente.

Con esa imagen, Hernández se posicionó como parte de un selecto grupo de alcaldes que tenía la disposición de crear una “zona de paz”. Esos municipios, que eran 14, tenían la tarea de desarrollar proyectos para reintegrar a los pandilleros en la sociedad. Y para Hernández y las pandillas esto implicaba más y mejores oportunidades económicas, pero solo si podían mantener los homicidios a un nivel bajo.

Para finales de 2013, eso era más difícil. Y según consta en los documentos judiciales a los que InSight Crime tuvo acceso, frente a la negativa de algunos miembros de la MS13 de reducir el crimen y los homicidios en la colonia Popotlán de Apopa, Hernández llamó a René Alvarado, alias “Viejo Rata” y líder de Barrio 18 que estaba recluido en la penal de Izalco, para ver cómo podían solucionar el problema.

Según relata un testigo protegido a quien la fiscalía llama “Ninja”, como parte del trato Hernández citó a Humilde a su despacho aquel día de muertos de 2013 a las 3:00 de la tarde. Los dos pandilleros de Barrio 18 que habían sido designados por Viejo Rata para asesinar al palabrero de la pandilla contraria lo esperaban en la plaza.

El santuario de la impunidad

En cierta medida, la lucha por el poder que las principales pandillas de El Salvador libran en las calles de sus barrios no es tan diferente a la que libran los partidos políticos en las sedes de poder del país. El poder, en ambos casos, se ha usado para beneficiar aliados, amigos o familiares con contratos de obras públicas o con trabajos en la recolección de residuos sólidos. En Apopa, la única diferencia real es qué tiene el delincuente alrededor de su cuello, si una corbata de seda o tatuajes carcelarios.

Durante su primer periodo en el poder (2012 - 2015), Hernández contaba con un concejo municipal que había sido elegido por él, lo cual facilitaba su manejo discrecional de esos recursos públicos, contratos y todas sus acciones criminales.

Sin embargo, en marzo de 2013 la Asamblea Legislativa de El Salvador [aprobó](#) una serie de reformas al Código Electoral para la implementación de Concejos Municipales Plurales a partir de las elecciones legislativas y municipales del año 2015. Con las reformas a la

ley electoral, Hernández perdería el control sobre el concejo y con ello el control legítimo que tenía sobre su alcaldía. Ahora sólo le quedaban las pandillas.

*Hernández
comenzaría
a dar dinero y
utilizar recursos
municipales para
favorecer a la
pandilla.*

En la práctica, si se atiende a lo que luego alegaría la FGR en sus acusaciones contra Hernández, las pandillas sirvieron al entonces alcalde para mantener a raya a concejales adversos. A cambio de la protección y servicios electorales con los que llegó al poder, Hernández comenzaría a dar dinero y utilizar recursos municipales para favorecer a la pandilla.

Para concretar eso, entre enero y mayo de 2014, los meses que siguieron al asesinato de Humilde, hubo en la alcaldía al menos tres reuniones entre el alcalde y presuntos pandilleros de Barrio 18 Revolucionarios, donde, con miras a las elecciones de 2015, el alcalde presuntamente se encontraba negociando votos, no solo para Apopa, sino también para Norman Quijano, el entonces candidato presidencial de ARENA.

ARENA ha negado estas implicaciones pero toda esta información sería conocida por la fiscalía y utilizada en el juicio contra Hernández gracias a varios testigos tal vez lo más importante fue a quien llamaron “Tanque”, el cual decidió hablar a cambio de una reducción en su condena después de su captura.

(Además de Tanque, la Fiscalía ha presentado a otros tres testigos en este caso, todos pandilleros del Barrio 18: Durán, Ninja y Triple X. El 26 de octubre pasado, la FGR pidió la inclusión de otros dos testigos.)

Según contó Tanque, en una de esas reuniones de 2014 en la alcaldía, Hernández pidió a las pandillas (una vez más) que le permitieran realizar campaña política en sus zonas de dominio, que sus familiares votaran por él y que redujeran los homicidios.

A cambio de sus peticiones, entre otras cosas, El Maistro estaba dispuesto a ordenar un despeje de las fuerzas de seguridad (policía y ejército) del centro de Apopa, de tal forma que solo quedaran miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), la policía local adscrita únicamente al poder del alcalde.

Información que surgió posteriormente muestra que algunos de los palabreros de las pandillas recibieron transferencias de hasta US\$ 10.000 de fondos municipales, así como acceso a vehículos, gasolina y mantenimiento. La fiscalía también ha señalado que algunos miembros de la pandilla tenían salarios mensuales que rondan los US\$ 5.000, una cifra difícilmente equiparable con la realidad fiscal de la municipalidad y con la del salario mínimo (cerca de US\$300) que ganaban la mayoría de pandilleros.

Hernández también se comprometió a aumentar una vez más los impuestos que pagaban diariamente los comercios ubicados en el mercado y dar el excedente a los Revolucionarios del Barrio 18; también ofreció seguir creando plazas en la alcaldía a las personas señaladas por las pandillas para llenarlas.

La alcaldía del Barrio

El día que mataron a Humilde, un agente del CAM que estaba de turno disparó contra los pandilleros que llevaron a cabo el plan; uno de ellos, gravemente herido, intentó escapar, pero fue atropellado por un carro unos pocos metros más adelante.

En lugar de reconocer la labor del agente por cumplir su trabajo, según la investigación fiscal, Hernández ordenó al CAM que no volviera a intervenir en enfrentamientos entre pandillas en el centro Apopa, ni siquiera en el caso de un posible homicidio, y despidió al agente del CAM que había interferido en su operación de sicariato. “Si observaban o presenciaban algo que no intervinieran por ningún motivo”, dice la acusación formal.

Además, el alcalde ordenó al jefe del CAM poner a disposición de “los muchachos” los vehículos de esa entidad y la ambulancia municipal para su transporte. Que según se lee en la acusación formal de la FGR, también era utilizada para transportar familiares de las pandillas si estaban enfermos o heridos e incluso para transportar drogas y armas.

Documentos judiciales a los que tuvo acceso InSight Crime señalan que cerca de 25 de los agentes del CAM terminaron en ese dispositivo de seguridad para la pandilla bajo la coordinación del Coronel Samuel Humberto Castro, quien es mencionado como alias “Coronel del CAM”.

Castro fue una pieza clave en la relación entre las pandillas y la alcaldía cuando se desempeñó como director del CAM entre 2013 y 2014, posteriormente pasaría a ocupar otros puestos importantes en la alcaldía, según la fiscalía.

En la acusación se menciona que Castro se reunió en varias oportunidades con las pandillas y que incluso fue él quien dio la orden a sus subalternos de dar transporte y proporcionar apoyo logístico a miembros de Barrio 18 Revolucionarios en el transporte de droga. Castro también es imputado en el caso judicial contra el exalcalde. InSight Crime intentó hablar con su defensor, pero no hubo respuesta.

El alcalde y sus asistentes más cercanos exhibían comportamientos que no distaban mucho de los que tradicionalmente son asociados a las pandillas. Meses antes de las elecciones del 2015, Hernández fue acusado de golpear y amenazar de muerte a Ovidio Cerón, candidato a la alcaldía de ARENA por el Partido Democracia Salvadoreña (PDS).

En febrero de 2016, la Unidad de Vida e Integridad Física de la FGR ordenó la captura de un grupo de pandilleros de Barrio 18 Revolucionarios en Apopa por el homicidio de un hombre en mayo de 2015, quien, según recuerdan los testigos, habían bajado de un microbús y disparado en una parada conocida como El Tanque, en la colonia Chintú de Apopa. Uno de los [capturados durante los operativos](#) era el subgerente de la alcaldía Julio Ramos.

El día después de su captura, Ramos se dio a la fuga, después de que un juez local le otorgara medidas sustitutivas a la prisión, gracias a una carta escrita por Hernández en la que [aseguraba haber estado con el subgerente](#) en el momento del homicidio. Ramos también es imputado (Ver carta abajo).



ALCALDÍA MUNICIPAL DE APOPA



DESPACHO MUNICIPAL

A QUIEN INTERESE

YO: **JOSE ELÍAS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**, mayor de edad, del domicilio de Apopa, departamento de San Salvador, portador de mi Documento Único de Identidad Numero: cero uno siete cuatro seis nueve cinco dos guion cuatro; actuando en mi calidad de Alcalde Municipal de la Ciudad de Apopa, departamento de San Salvador, para el periodo del año DOS MIL QUINCE al año DOS MIL DIECIOCHO, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** En fecha Veintinueve de mayo del año dos mil quince, se llevó a cabo Reunión Extraordinaria con diferentes Jefes, Subjefes, y otras personas que trabajan para esta municipalidad, dicha Reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la segunda planta donde funciona la Clínica Municipal de esta ciudad, en la cual estuvo presente el Señor: **JULIO ANTONIO RAMOS SANCHEZ**, quien se desempeña como **AUXILIAR DE GERENCIA**, reunión que se desarrolló desde las diecisiete horas hasta las veintún horas de ese día, además se verifico en el Centro de Informática de entrada y salidas de empleados de esta Municipalidad y el Señor **JULIO ANTONIO RAMOS SANCHEZ**, se presentó a laborar a dicha municipalidad según Registro que lleva el departamento de Informática en horario normal.

Y para los usos que se estimen necesarios, extendo la presente en la ciudad de Apopa, a los veintinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

Atentamente,



 Sr. José Elías Hernández Hernández
 Alcalde Municipal


 Elías Hernández
 Juntos por el Desarrollo

Carta de Hernández al juez

Ramos no era el primer funcionario de la alcaldía capturado por sus vínculos con las pandillas. Ya el año anterior otro empleado había sido capturado por ayudar a un pandillero que intentaba escapar de las fuerzas de seguridad y otro había sido acusado de ser palabrero.

El problema se extendió más allá de Apopa. En los últimos dos años, la Fiscalía ha investigado al menos a cinco alcaldes por posibles nexos con las pandillas, y ha procesado

al menos a dos de ellos: además de a Hernández, a Miguel Ángel Jaime, alcalde por Usulután, una de las ciudades más importantes del oriente del país. Un funcionario de la FGR señaló a InSight Crime que actualmente se encontraban investigando a 11 de los 14 alcaldes que hacían parte del selecto grupo de las “zonas de paz”.

En las elecciones municipales del 1 de marzo de 2015 hubo otro incidente violento. Luego de marcar con una “X” la casilla que contenía el nombre de su partido, Hernández [se volteó](#) hacia una de las cámaras para enseñarle su tarjeta de votación.



Hernández mostrando su tarjeta de votación. Crédito: Canal 29

La vigilante de seguridad encargada de verificar el proceso de votación en el centro, quien por casualidad era hermana de Zoila Quijada del FMLN, vio a Hernández mostrar su voto, lo cual es ilegal, y reaccionó de inmediato: “Ese voto es nulo,” dijo. “Ese voto es nulo”.

La reacción de los simpatizantes de ARENA en el centro de votación no se hizo esperar y varias personas se fueron encima de la mujer que había anulado el voto. Según dice la acusación de la fiscalía, Darwin Hernández, el hijo del alcalde agarró a la mujer violentamente del brazo y la amenazó de muerte. El jefe suplente del partido ARENA también se acercó a la víctima y le dijo “hermana de Zoila Quijada, te vamos a matar”, de acuerdo a lo recogido en el expediente judicial.

La mujer inmediatamente fue privada de su libertad y liberada al poco tiempo. La Fiscalía posteriormente emitió una orden de captura contra el hijo de Hernández por el caso, pero fue exonerado luego de que la víctima retirara los cargos.

Mientras tanto, comenzaban a salir a la luz los vínculos de Hernández con las pandillas, los mismos que le aseguraron su corto regreso al poder. El año anterior, por ejemplo, había surgido información sobre [la velación](#) de tres pandilleros de Barrio 18 en la sede de ARENA de Apopa; algo que Hernández luego intentaría negar.

En septiembre de 2015, 231 presuntos pandilleros [fueron detenidos](#) en las instalaciones del equipo de fútbol Vendaval en Apopa, durante una fiesta con música que hacía apología a las pandillas y que había sido patrocinada por la alcaldía.

Esa no fue la única fiesta ni para la pandilla ni para la alcaldía. Días después de su reelección, en una muestra de agradecimiento según la fiscalía, Hernández alquiló cuatro buses que llenó de pandilleros y de sus colaboradores más cercanos y los envió a la playa San Marcelino.

La fiesta duró más de una semana y, de acuerdo con la fiscalía, el trago, la comida y las drogas fueron [financiados](#) con dineros públicos. Según un testigo que habló con las autoridades, durante una semana, los invitados consumieron comida, cerveza, licor, marihuana y cocaína en la playa a cuenta del erario público.

El fin del camino

El 4 de junio 2016, la PNC y la FGR realizaron 40 allanamientos y ejecutaron órdenes de captura contra el alcalde, su esposa, su hijo y 29 empleados de la municipalidad.

Hernández fue capturado por el cargo de amenaza, pero pocas horas después el director de la PNC, Howard Cotto, explicó la complejidad de la red que operaba El Maistro desde su alcaldía y adelantó que se agregarían otros cargos.

Se [investigaban](#) cinco homicidios, entre ellos el de Humilde, un homicidio tentado y otra serie de delitos que incluían expresiones de violencia contra la mujer y posesión de piezas arqueológicas no declaradas. Hernández también era acusado de facilitar las operaciones de pandillas y de haberles dado más de US\$500.000 en transporte, vales de gasolina y mantenimiento de vehículos.

Durante los operativos también se realizaron una serie de detenciones de funcionarios por amenazas y agrupaciones ilícitas. Entre los capturados estaban el gerente general de mercados, seis agentes del CAM, uno de los cuales fue policía, y la coordinadora de proyectos sociales.



Captura de pantalla de la publicación del alcalde en Facebook

La policía también informó que había identificado como parte de la red a otras 35 personas en distintos centros penales, en su mayoría cabecillas del Barrio 18 reclusos en el Centro Penal de Quezaltepeque.

Pocos minutos después de que la fiscalía informó en su cuenta de Twitter que el alcalde

Hernández había sido capturado, el Maistro anunciaba a sus seguidores en Facebook que había sido interceptado por un vehículo de la PNC. El mensaje fue borrado [minutos después](#), cuando algunos medios de prensa cuestionaron el acceso del recién capturado a un teléfono celular.

Una semana después de las primeras capturas, el fiscal del caso aseguró que ya habían sido detenidas 32 personas de las 97 involucradas en el caso. Hernández se declaró entonces un “[preso político](#)” y señaló que “solo porque somos de un partido de derecha nos han venido persiguiendo desde hace mucho tiempo; esto estaba planificado por la izquierda”.

La herencia del alcalde Hernández

El sol de la mañana de marzo ya había obligado a la banda marcial escolar a silenciar sus bombos y platillos para reemplazarlos por baldes de color rojo, repletos con bolsas de agua, que los niños repartían entre la multitud reunida bajo una carpa blanca y azul que había sido instalada en la plaza central, justo frente al palacio municipal de Apopa. La mezcla de colores recordaba a los de la ARENA.

El motivo del acto era el lanzamiento del plan de seguridad Apopa Seguro, parte del plan nacional de seguridad El Salvador Seguro que había sido lanzado poco antes como parte de una serie de medidas extraordinarias aprobadas por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, del FMLN.

En la tarima también estaba el nuevo alcalde a Apopa, el coronel José Santiago Zelaya, así como representantes del gobierno nacional y local, miembros de la sociedad civil y empresarial y representantes de la comunidad internacional.

“Apopa estaba dentro de los 50 municipios más violentos, antes estábamos en el segundo lugar ahora estamos ya en el 18 lugar, o sea que [el plan] ha dado resultado”, anunciaba con orgullo desde el podio el recién nombrado alcalde de Apopa.

A comienzos de 2014 la policía dio la tregua por “[terminada](#)”, luego de que entre el 1 de enero y el 1 de marzo se registraran 501 asesinatos, 106 más que los contabilizados en ese mismo período del 2013.

Y en 2015 la administración de Sánchez Cerén decidió dejar atrás los intentos no oficiales de algunos miembros de su gabinete de mantener vivos los diálogos con las pandillas y optó, en cambio, por enfrentarlas con una nueva versión de la “mano dura”, la política de perseguir y encarcelar a los pandilleros en masa.

Para eso el presidente estableció una serie de batallones especiales al interior de la policía, que tenía como objetivo realizar un ataque frontal a las pandillas y abrió la puerta a un enfrentamiento que mantiene a El Salvador entre los países más violentos del mundo.

Pero mientras en la plaza las autoridades desplegaban la retórica de combate frontal a las pandillas, en varias de las paredes del palacio municipal de Apopa todavía colgaban fotografías del exalcalde que había convivido con ellas. El Palacio Municipal sigue pintado del color azul, el mismo que cuando Hernández llegó al poder y la oficina sigue siendo la única del edificio con aire acondicionado.

Al interior hay un amplio escritorio de madera desde el que antes despachó el Maistro y donde ese día estaba sentado el coronel Zelaya. Antes de convertirse en alcalde, Zelaya fue regidor del Concejo Municipal, director general municipal de Arena, alcalde interino durante las ausencias de Hernández, director interino del CAM. El coronel fue, siempre, la mano derecha del exalcalde.

Cuando InSight Crime pregunto a Zelaya sobre la relación de la actual alcaldía con las pandillas respondió que “Pues ahora ninguna relación, porque a mí me quisieron extorsionar y yo les dije allí a los medios de comunicación de que no iba a negociar con ellos”.

Según el coronel, incluso habría pedido a la FGR que la interceptara su teléfono en mayo de este año. Dice el alcalde que la única relación que mantiene actualmente con

las pandillas se da por medio de un programa de prevención de violencia que ha venido implementando con el gobierno de los Estados Unidos.

“En este momento aquí está cortada esa relación que había antes”, recalcó.

Por el lado económico, el coronel sigue con los planes Hernández. Anunció [este año](#) la construcción de dos megaproyectos de residencias, oficinas y locales comerciales, que tendrá un valor cercano a los US\$ 500 millones, así como la construcción de un nuevo centro de un nuevo centro comercial llamado Plaza Mundo, que se supone generará cerca de 7.000 empleos.

Pese a las declaraciones de Zelaya todavía hay preocupaciones de que el acuerdo entre la alcaldía y las pandillas sigue en pie. Días después de la captura de Hernández, fue asesinado René Antonio Díaz Orellana, un miembro del concejo por el FMLN, mientras caminaba en la calle junto con su familia. Los principales sospechosos fueron pandilleros.

En esos mismos días presuntos pandilleros llamaron al menos tres dependencias de la alcaldía (al catastro municipal, al mercado y a la recolección de desechos sólidos) y exigieron la renuncia de sus puestos, que según señala la investigación de la fiscalía son los mismos puestos que habían ocupado las pandillas durante la administración de Hernández.

Las autoridades no confirmaron la relación del asesinato con esa serie de llamadas a la alcaldía, pero cuando hablamos con los empleados la preocupación era evidente.

El propio coronel [Zelaya denunció](#) que las pandillas habían llamado a la alcaldía a exigir “algún privilegio que tal vez ellos pudieran querer” y solicitó un refuerzo de seguridad a la policía. El problema es que Hernández, por las exigencias de la misma pandilla que ahora amenazaban a la alcaldía, había sacado a los policías de la plaza principal.

** Esta investigación se llevó a cabo con ayuda de Suecia. Hace parte de una serie de tres informes sobre los alcaldes en el Triángulo Norte. Foto de portada por La Prensa Gráfica*

La Fundación InSight Crime

InSight Crime es una fundación dedicada al estudio de la principal amenaza a la seguridad nacional y ciudadana en Latinoamérica y el Caribe: el crimen organizado.

InSight Crime tiene como objetivo comprender a profundidad el crimen organizado en el continente americano, mediante la investigación de campo y el análisis desde una perspectiva transnacional y con base en las políticas.

Cumplimos esta misión:

- Proporcionando análisis oportunos y de alta calidad sobre los hechos noticiosos relacionados con el crimen organizado en la región;
- Investigando y redactando informes sobre el crimen organizado y sus múltiples manifestaciones, incluyendo su impacto sobre los Derechos Humanos, el gobierno, la política de drogas y otros problemas sociales, económicos y políticos;
- Organizando talleres para periodistas, académicos y organizaciones no gubernamentales sobre la forma como se debe cubrir este importante asunto, sobre cómo mantenerse a salvo y sobre cómo proteger su material y sus fuentes;
- Apoyando a los investigadores locales por medio de estos talleres y publicando, traduciendo y promocionando su trabajo con el fin de llegar a una audiencia más amplia;
- Desarrollando una red regional de investigadores que estudien el crimen organizado;
- Presentando a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, académicos y grupos de interés, en sesiones públicas y privadas, las estrategias y los obstáculos que hay en la implementación de políticas de seguridad ciudadana en el terreno.

Para más información, visite es.insightcrime.org
O contáctenos a: info@insightcrime.org

InSight Crime
Centro de Investigación
de Crimen Organizado